Latin American and Caribbean Law and Economics Association

From the SelectedWorks of Jose Luis Sardon

January 1995

Walter Piazza en el MEF: Recuento de una frustración costosa

Contact Author

Start Your Own SelectedWorks

Notify Me of New Work

Available at: http://works.bepress.com/jose_luis_sardon/2

WALTER PIAZZA EN EL MEF:
RECUENTO DE UNA FRUSTRACIÓN COSTOSA

por José Luis Sardón

Lima, 1995

Tabla de Contenidos

Introducción 3

1. Ubicación de la gestión Piazza 4

2. Walter Piazza Tangüis 8

3. La situación económica del Perú en 1977 13

4. La convocatoria a Piazza 18

5. La situación política del Perú en 1977 23

6. El Programa de Emergencia 28

7. La aplicación del Programa 33

8. Crisis y salida de Piazza 38

9. Los quince años siguientes 43

10. Conclusiones 48

Notas 53

Reconocimientos 56

Introducción

Cuando en julio de 1977 —como resultado de la incomprensión del gobierno militar respecto de la grave crisis económica en que había puesto al Perú como consecuencia de políticas inadecuadas— se frustró la gestión de Walter Piazza Tangüis en el Ministerio de Economía y Finanzas, recuerdo que pasé unas semanas ordenando todos los papeles referentes a la misma para que algún día, superadas las emociones y muchas concepciones erradas del momento, pudiera escribir la historia dramática de esos 50 días. No encontré después el tiempo para ello. Afortunadamente, por una feliz circunstancia, José Luis Sardón se ofreció para escribir sobre esta breve pero aleccionadora experiencia. Aparte de otorgarle acceso a los documentos correspondientes y de algunas entrevistas que tuve con el autor y él con Walter Piazza, la calidad del presente trabajo de investigación e interpretación corresponde íntegramente al autor.

El Instituto APOYO se complace en presentar este ensayo sobre una historia que tuvo mucho que ver con su posterior gestación y desarrollo.

Felipe Ortiz de Zevallos M.

1. Ubicación de la gestión Piazza

En 1977, por cincuenta días, el ingeniero Walter Piazza Tangüis ocupó uno de los puestos públicos más importantes que hay en el Perú —el de ministro de Economía y Finanzas. No obstante su brevedad, esta gestión pública está, aún hoy, cargada de lecciones sobre el proceso de desarrollo peruano. Ello es así tanto por el programa de acción que se propuso como por la combinación de factores que la llevaron a un abrupto final.

Cronológicamente, la gestión Piazza se ubica al medio de los cerca de treinta años de populismo económico por los que atravesó el Perú en la segunda mitad del siglo XX. En términos generales, puede afirmarse que esta etapa de la historia económica peruana se inicia en 1962, con el golpe de Estado de la Junta Militar de Gobierno, y se cierra en 1990, con la llegada al poder del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori.

La gestión Piazza representó un paréntesis dentro del populismo económico vigente durante esos años, uno de los más serios intentos —si es que no el más serio de todos— que se hizo por corregir el rumbo que estaba llevando entonces al país hacia el despeñadero. De haber ejecutado su programa, el Perú acaso se habría ahorrado la crisis económica ocurrida en la década siguiente, una tan profunda que lo llevó al borde de su desaparición como Estado.

La gestión Piazza se realizó en el contexto de la Segunda Fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez. Esta etapa puede ser entendida
—según han resaltado distintos analistas— como la etapa termidoriana o moderada de dicho gobierno. Ella desactivó los extremismos de la Primera Fase, es decir, la etapa jacobina o radical1.

Morales Bermúdez había sido ministro de Hacienda durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Asimismo, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ocupó varios puestos claves, incluyendo el de ministro de Economía

y Finanzas. En esta condición, fue expositor en la Conferencia Anual de Ejecutivos de 1972 (CADE '72) desarrollando el tema "Financiamiento para el Desarrollo". Allí dijo:

> "(...) podemos considerar que nuestra economía muestra en los últimos cuatro años, incluyendo el presente, resultados que no podemos catalogarlos ni mucho menos de extraordinarios, pero que dentro de todos los problemas que tiene que manejar el país pueden considerarse satisfactorios (...)"2.

Morales Bermúdez no tomó, pues, la actitud apasionada de, digamos, el general Leonidas Rodríguez Figueroa. En el mismo CADE, éste proclamó con vehemencia los triunfos de la Revolución Peruana3. La exposición de Morales Bermúdez fue mucho más seria. Empero, no prestó atención suficiente al ya notorio declive de la producción —especialmente, de la agrícola. El resto de la misma se extendió en argumentos socioeconómicos que reflejaron la confusión ideológica de entonces.

Morales Bermúdez participó en los más altos niveles del gobierno de la Primera Fase. No obstante, no tomó parte en la gestación del golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 ni llegó a ser del grupo íntimo de Velasco. La razón de ello quizá no fue sólo ideológica sino principalmente psicológica. Ambos eran oficiales del Ejército Peruano, y compartían la misma educación militar. Pese a ello, existían profundas diferencias entre el entorno familiar en el que se habían formado.

Velasco era un piurano de clase media modesta, que había crecido en medio de circunstancias difíciles. Morales Bermúdez, en cambio, pertenecía a la clase media limeña acomodada. Un antepasado suyo directo, el coronel Remigio Morales Bermúdez, había sido Presidente de la República durante la etapa llamada de "La Reconstrucción", luego de la Guerra con Chile. En todo caso, su padre, también militar, había sido asesinado "dicen que por los apristas".

Estas circunstancias contribuyen a explicar el que Velasco fuera bastante más combativo pero también más autoritario que Morales Bermúdez. Esto último se reflejó en el hecho de que, aunque Velasco tuvo a varios civiles como asesores en los más altos niveles de su gobierno, les dio poca cabida en los puestos de responsabilidad directa. Durante el septenato velas-quista, no hubo, por ejemplo, ningún ministro civil.

Por el contrario, la Segunda Fase sí incorporó civiles a puestos claves. Fue el mismo Morales Bermúdez quien consideró conveniente darle carteras en el gabinete a civiles —la del Ministerio de Economía y Finanzas incluida. Desde el inicio de su gobierno, llevó adelante esa apertura, que anunciaba ya la voluntad de devolver a la civilidad las responsa-bilidades del gobierno, tal como ocurriría en 1980.

El primer civil en desempeñarse como ministro de Economía y Finanzas en esta fase fue el ingeniero Luis Barúa Castañeda. La gestión Barúa despertó grandes expectativas, puesto que cambió la retórica agresiva que había caracterizado a la Primera Fase. Barúa representó el primer cambio importante en el lenguaje oficial de la Revolución Peruana. Fue el símbolo de que se podría recuperar algo de lo desandado.

Sin embargo, la gestión Barúa naufragó por la falta de apoyo que tuvo en el gabinete ministerial. En alguna medida, esto se debió al poco liderazgo de la personalidad de Barúa, quien había sido anteriormente un destacado funcionario, pero que no había tenido trayectoria pública autónoma. Pero quizá la razón principal que la explica fue la actitud hamletiana de Morales Bermúdez, quien concibió su tarea de gobernante como un noble, agónico y muy prolongado esfuerzo por equilibrar ideas e intereses políticos contradictorios.

Esta situación también fue causa y efecto de tensión entre Barúa y el Banco Central de Reserva (BCR), que entonces estaba presidido por Carlos Santistevan de Noriega y comandado por un equipo de técnicos altamente calificados, que encabezaban Manuel Moreyra, Alonso Polar y Claudio Herzka. El BCR presionaba por la reducción de los gastos públicos. Sin embargo, Barúa no tuvo apoyo suficiente en el gabinete, casi íntegramente compuesto por militares.

Barúa encontró —al igual que luego lo haría su sucesor— que las jerarquías militares se cruzaban con las civiles. A pesar de su mayor apertura, el gobierno de la Segunda Fase seguía siendo uno fundamentalmente castrense. Estar a cargo del portafolio clave de Economía y Finanzas no le dio a Barúa poder suficiente para imponer un recorte significativo en los gastos de armamentos, entonces muy elevados.

La frustración de sus intentos por frenar la espiral armamentista no llevó a Barúa a creer, inmediatamente, que todo estaba perdido. El y sus asesores pensaron que el

déficit fiscal podría disminuir con un alza en el precio de los minerales que el Perú exportaba a los mercados internacionales. Eventualmente, estas expectativas se llegarían a realizar, pero sólo dos años después, cuando el titular de Economía y Finanzas fue Javier Silva Ruete.

Durante los primeros meses de 1977, la espera de que esto se concretara generó una creciente tensión entre el MEF y el BCR, que insistía en reducir el financiamiento interno al gasto público. La situación de Barúa en el gobierno terminó agravándose por la conformación de una Comisión de ministros, presidida por el General Gastón Ibáñez O'Brien, ministro de Industria y Turismo, dedicada a evaluar la situación de las finanzas públicas. Claramente, éste fue un gesto de desconfianza hacia la gestión de Barúa.

Morales Bermúdez era consciente de la gravedad del déficit fiscal. Sin embargo, acaso pensó, en mayo de 1977, que Barúa era ya una figura pública demasiado desgastada. El semanario Equis X, por ejemplo, había pedido, semanas atrás, su renuncia en una de sus carátulas. Probablemente por estas consideraciones, Morales Bermúdez no dio a Barúa el respaldo que requería. En su carta de renuncia, fechada el 13 de mayo de 1977 y publicada en los diarios limeños el 17, Barúa decía:

> "(...) no fue posible a este Portafolio lograr reducir el déficit presupuestal del Gobierno Central a cifras aceptables, ni tampoco fue acogida su propuesta de incrementar los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo, para corregir el déficit de Petroperú (...)"4.

Barúa también se refirió a una Comisión de ministros "quienes llegan a conclusiones discrepantes con las medidas propuestas por mi Portafolio". Son las conclusiones de esa Comisión y "la misma existencia de ésta" las que lo obligan a presentar, pues, su carta de renuncia —la revista Caretas haría notar luego que su gestión en el MEF le había valido a Barúa el ser condecorado con la Orden del Sol, pero también el haber perdido diez kilos de peso.

El mismo día en que se anunció en los periódicos la renuncia de Barúa, juró como nuevo ministro el ingeniero Walter Piazza Tangüis.

2. Walter Piazza Tangüis

Walter Piazza Tangüis había cursado sus estudios escolares en el colegio de La Recoleta y, luego, el Bachillerato y la Maestría en Ingeniería Eléctrica en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Boston. En 1949, a su retorno de Estados Unidos, entró a trabajar en Imaco, subsidiaria de W.R. Grace & Co. y representante de la General Electric Co. en el Perú.

Piazza llegó a ser gerente general de Imaco y allí afianzó su amistad con José Valdez, su futuro socio, quien llegaría a ocupar una gerencia en la misma empresa. Valdez había sido alumno de Piazza en la Universidad Nacional de Ingeniería, durante los años en que éste fue allí profesor universitario.

Más tarde, en los años sesentas, Piazza asumió la dirección de la Hacienda Urrutia, ubicada en Pisco, que había sido propiedad de su abuelo materno Fermín Tangüis —seleccionador del famoso algodón Tangüis. En 1969, sin embargo, la parte de esta hacienda que Piazza tenía a su cargo fue expropiada por la Reforma Agraria, al no tener éste su "conducción directa".

En esos años, Piazza dirigió también una de las más importantes industrias de harina de pescado peruanas, Industrial Propesca S.A., que llegó a tener plantas en Callao, Chimbote y Chincha. Asimismo, después de dejar Imaco, se asoció con Valdez para fundar P. & V. Ingenieros S.A., dedicada a la ingeniería de consulta y al diseño de proyectos, y Pivasa, dedicada a la construcción, que luego se convertiría en Cosapi5.

A inicios de los setentas, entonces, Piazza dividía su jornada entre la industria de harina de pescado y las empresas que tenía en sociedad con Valdez. Sin embargo, en 1972, el gobierno procedió a estatizar la pesca, afectando al sector empresarial por segunda vez, y haciendo más claras sus intenciones de enrumbar hacia el socialismo.

Esta evolución de los acontecimientos empujó a varios empresarios —entre ellos, Piazza— a desarrollar una mayor actuación pública, a través, principalmente, del

Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), que se había constituido a inicios de los sesentas para promover la educación y la cultura empresarial.

Desde 1961, IPAE había convocado las CADE. En sus inicios, ellas fueron pequeñas citas de empresarios en el Balneario de Paracas, sin público ni prensa. Pero, en 1963, el presidente Belaunde, estando de gira en provincias, decidió "caerse" por la reunión, cambiando su carácter. A partir de entonces, se convirtieron en el encuentro —profusamente cubierto por la prensa— de los empresarios con el Presidente.

CADE ya era, en 1968, una institución oficiosa de la política peruana. Como era lógico, CADE concitó ese año gran expectativa. El recién instalado gobierno militar había estrenado una confusa retórica que no permitía ver con claridad hacia dónde llevaría al país. Al inicio, lo único evidente fue su agresivo nacionalismo: el 9 de octubre, el Ejército tomó las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC) en Talara.

En contra de lo esperado, Velasco acudió a CADE para anunciar que su gobierno no sería de ninguna manera contrario a la empresa privada. Lo mismo haría en 1969, después de promulgar la Reforma Agraria; en 1970, después de haber dictado la Reforma de la Empresa; y en 1971, después de haber sancionado la Reforma Educativa.

Piazza fue uno de los expositores de CADE '71, desarrollando el tema "La Industria y el Plan Nacional de Desarrollo". La suya fue una exposición técnica, centrada en la cuestión de qué se podía hacer para fomentar el desarrollo industrial en el Perú. Al hacerlo, no atacó la idea misma de las empresas estatales, pero enfatizó que la mayor participación del Estado como empresario no implicaría necesariamente una mejor distribución del ingreso.

Por otro lado, Piazza dijo que las empresas estatales debían tener directorios ágiles y con gerencias que dispusieran de las herramientas necesarias para la dirección empresarial. En general, anotó, era necesario despojarse de decisiones de carácter emocional y tender, más bien, a la cuantificación de nuestros defectos estructurales de países subdesarrollados6.

Dicho discurso fue muy elogiado por los empresarios. No sorprendería, entonces, que Piazza resultara elegido, luego, como presidente de IPAE. En tal condición, según la

tradición, Piazza debía designar al presidente de CADE '72, a realizarse en Paracas. Sin embargo, a esas alturas de la Revolución Peruana, el rumbo hacia el socialismo parecía ser, como ya se ha dicho, claro.

Por esto, Piazza decidió que él mismo presidiría CADE y que tendría a su cargo las palabras iniciales y finales del evento. Según la tradición, éste sería clausurado por Velasco. En agosto de 1972, estando CADE aún a varios meses, y sabiendo esto, Velasco ordenó que se le entregara copia de los discursos que leería Piazza, quien estaba en un viaje de negocios en el extranjero.

Piazza tuvo que retornar al país para escribir, durante un fin de semana apresurado, los discursos que pronunciaría casi tres meses después. Así, cumplió con enviar a Velasco sus discursos en la fecha solicitada. Los mismos —sobre todo, el de clausura, que sería leído en presencia de Velasco— ya no tenían el tono neutral de su intervención en CADE '71. Piazza preparó una enérgica defensa de los fundamentos éticos de una economía empresarial.

En sus primeras líneas, Piazza señaló:

> "(...) el hombre (...) hay que definirlo tal como es: un ser por natura egoísta que busca su felicidad, pero que sólo alcanza su calidad verdaderamente humana cuando su espíritu se proyecta sobre la sociedad"7.

Luego, Piazza hizo notar que el Perú tenía una economía mixta, de mercado y estatal, en la que el Estado tenía ya un rol fundamental de regulación, e indicó los riesgos de que las empresas públicas se tornaran en entes político-burocráticos. Asimismo, en alusión a la Reforma de la Empresa, dijo que no debía confundirse participación con autoridad, sin la cual sólo hay caos institucional.

Finalmente, el discurso desembocaba en el tema de la motivación empresarial. Las reformas novedosas que venía implementando el gobierno militar, según Piazza, no debían desmotivar a los empresarios. El ánimo de lucro, satanizado moral y políticamente por el gobierno militar, debía ser revaluado. Piazza dijo: "Las utilidades empresariales, medida del éxito económico, son una de las fuentes de capitalización interna de una nación. Son legítimas y deseables".

En su conclusión, Piazza afirmaba: "(...) la existencia, o mejor aún, la aparición de empresarios depende de la presencia de un adecuado clima de motivación empresarial y de un reconocimiento del efecto multiplicador de este clima". Se trataba, pues, de un serio cuestionamiento de los principios fundamentales del gobierno militar.

Con posterioridad a la entrega de estos discursos, pero antes de CADE, se realizó el tradicional acto protocolar en Palacio, en el que miembros del directorio de IPAE invitaron formalmente a Velasco a clausurar el evento. En esa reunión, Velasco trató a Piazza con gran cordialidad, sin comentar su discurso. Sin embargo, Carlos Delgado, su asesor principal, había preparado ya una áspera respuesta.

Llegado el día, Piazza leyó el discurso reseñado —y Velasco respondió, haciendo una caricatura del mismo:

> "(...) me veo obligado a señalar reparos y discrepancias significativos con respecto a lo sostenido esta tarde por el actual presidente de IPAE. (...) hay un fundamental error insub-sanable en sostener un enfoque de los problemas sociales, económicos y políticos basado en el individualismo, o una reducción de la compleja naturaleza de lo humano a la sola dimensión del egoísmo (...)"8.

Velasco trató de aislar a Piazza, comparando su actitud de incomprensión de la Revolución Peruana con la que habían mostrado los presidentes de anteriores CADE. Citó también los pasajes de los discursos de éstos que más le favorecían, sacándolos de contexto. Algunos discursos se prestaban, por cierto, a ello9.

La reacción de los empresarios concurrentes fue reveladora del temor que puede generar una dictadura. En el coctel de cierre, al borde de una piscina, la mayoría de los asistentes dejaron solo a Piazza. Entre las autoridades presentes, sólo el Alcalde de Lima Eduardo "Chachi" Dibós, quien había sido roommate de Piazza en el MIT, se le acercó y le dijo, cariñosa y risueñamente, que "no se les debía hablar así a los militares".

En los días siguientes, Piazza renunció a la Presidencia de IPAE, alegando que no quería entorpecer la relación de esta institución con el gobierno. Luego de su

intervención en la sesión de Directorio, se produjo un desconcierto, que pudo interpretarse como que se quedaba nuevamente solo. Curiosamente, fue a iniciativa de un militar, el general Carlos Bobbio Centurión, presidente de Petroperú y director de IPAE, que no se aceptó su renuncia.

Este incidente acreditó a Piazza como un empresario con capacidad de desarrollar una actuación pública con autonomía y coraje.

3. La situación económica del Perú en 1977

Cuando Piazza asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas, el país afrontaba dos grandes problemas económicos: el creciente déficit fiscal, que presionaba en la inflación, y el modelo de desarrollo colectivista de la Primera Fase, que la Segunda Fase no se decidía a corregir. De éstos, el más apremiante era, como había señalado Barúa en su carta de renuncia, el primero.

Las finanzas públicas tenían cifras cada vez más en rojo. El déficit presupuestal en 1975 era de 758 millones de dólares, y en 1976 subió a 868 millones de dólares, acercándose al 10 por ciento del PBI. Asimismo, en 1973 y 1974, durante los años en que Morales Bermúdez tuvo a su cargo el portafolio de Economía, el Perú ya había empezado a tener inflaciones de dos dígitos: 14 y 19 por ciento, respectivamente.

Desde que empezó la Segunda Fase, el problema de las finanzas públicas se tornó aún más agudo. El creciente déficit fiscal llevó a mayores emisiones inorgánicas de dinero. Así, en 1975 la inflación llegó a 24 por ciento y, en 1976, ya completamente desbocada, alcanzó el 47 por ciento. Estas cifras, moderadas en comparación a las que se registrarían a finales de la década siguiente, trastornaron, sin embargo, la vida económica del país.

El déficit fiscal, origen de la creciente inflación, tenía dos causas principales: de un lado, las cada vez mayores compras de armamentos en las que había incurrido el gobierno de la Primera Fase, cuyos montos no habían sido sustancialmente reducidos por la Segunda Fase; y, de otro, los déficit permanentes que arrojaba la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú).

Durante la Primera Fase, las compras de armamentos se elevaron a niveles nunca antes conocidos. Sin embargo, con la llegada de Morales Bermúdez, esas cifras no disminuyeron sino aumentaron. En 1977, de hecho, las compras de armamentos llegarían a su pico histórico: 521 millones de dólares. Ni antes ni después el Perú invertiría tanto en armamento10.

La razón que explica esto acaso sea de naturaleza política, de equilibrio de poderes dentro del gobierno de la Segunda Fase. Quizá atendiendo las demandas de equipamiento militar, Morales Bermúdez logró el apoyo a las medidas con las que estaba desmontando el radicalismo estatizante de la Primera Fase.

Junto a la compra de armamentos, el otro gran generador del déficit presupuestal lo constituía los crecientes déficits de Petroperú. Esta empresa estatal se había constituido en 1969, por el Decreto Ley 17753, que consolidaba la fusión de la IPC con la ex Empresa Petrolera Fiscal. Tenía como objeto la explotación, distribución y hasta comercialización del petróleo y sus derivados11.

Al iniciarse la Segunda Fase, Petroperú llevaba ya varios años recibiendo subsidios fiscales. Queriendo cubrir el sol con un dedo, el gobierno militar se había empeñado, en efecto, en tener la gasolina a precio regalado. Así, entre 1970 y 1974, la gasolina de 84 octanos costó en el Perú apenas 0.24 dólares el galón. La formación de la OPEP y el alza del petróleo, en 1973, no generó una corrección en este precio de un producto que el Perú entonces importaba.

En realidad, Velasco festejó la formación de la OPEP como una medida de hermandad tercermundista, y llegó a pensar que el Perú no tardaría en adherirse al mismo. Luego, alentado por los hallazgos de petróleo en la selva, llegó al extremo, inclusive, de rebajar el precio de la gasolina de 84 octanos, que pasó de 10 a 9 soles. Desde entonces, este precio estuvo subsidiado y, sólo en 1973, Petroperú tuvo un déficit de 500 millones de dólares12.

Cuando este déficit fue ya demasiado evidente, el gobierno militar creó unas pintorescas calcomanías rojas, azules y blancas, de uso obligatorio para los automóviles, y que impedían circular determinados días de la semana. De esa manera, se quería reducir el consumo de la gasolina subsidiada.

Los militares y sus asesores pensaban que, si subían el precio de la gasolina, la inflación se dispararía. Creían, al igual que los economistas heterodoxos que dirigieron la economía peruana casi ininterrumpidamente hasta 1990, que la inflación se originaba en expectativas psicológicas más que en emisión inorgánica de moneda.

Por esta razón, el porcentaje del PBI destinado a subsidios, tanto de alimentos como de combustibles, saltó de 0.2 (entre 1969 y 1973) a 1.2 (en 1974), a 1.8 (en 1975) y a 2.3 por ciento (en 1976)13. Estos subsidios hicieron que la economía peruana fuera cada vez más artificial y que el sistema de precios dejara de transmitir la información que permite una eficiente asignación de recursos.

Ahora bien, además del problema del déficit fiscal, existía otro aún más serio. Era el modelo de desarrollo que el gobierno militar venía implementando en el país. Éste reclamaba ser sui generis, y se definía por una doble negación —pretendía ser ni capitalista ni comunista.

El 24 de junio de 1969, Velasco había sancionado el Decreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria. Esta produjo una conmoción en la estructura económica del país, puesto que expropió las haciendas de extensiones mayores a la llamada Unidad Agrícola Familiar que no estuvieran siendo conducidas directamente por sus propietarios. Éstas se entregaron a Cooperativas de campesinos constituidas a la fuerza y monitoreadas por técnicos limeños.

La expropiación de las haciendas fue pagada no con dinero en efectivo sino con bonos redimibles en veinte años. Una vez desatada la espiral inflacionaria, dichos bonos perdieron completamente su valor. Por ello, a la distancia, se podría afirmar que tales expropiaciones fueron, en realidad, confiscaciones.

La Reforma Agraria fue seguida luego por otras confiscaciones y atropellos contra los derechos de propiedad de los ciudadanos. Entre ellas, por su importancia económica, cabe volver a recordar, en 1972, las ocurridas contra las empresas pesqueras peruanas, encabezadas por las del entonces recién asesinado magnate tacneño Luis Banchero Rossi. Para encargarse de su manejo, el Estado creó Pescaperú.

En los pocos sectores importantes de la economía donde se respetó la empresa privada (industrias y minería), se creó la llamada Comunidad Laboral. El Decreto Ley 18350, Ley de Reforma de la Empresa, ordenaba una participación compulsiva y colectivista de los trabajadores en sus utilidades, gestión y propiedad.

Todas estas reformas estructurales fueron conducidas y llevadas adelante, pues, por la Primera Fase. En su concepción colectivista y estatista, un rol fundamental correspondió al Consejo de Asesores de la Presidencia (Coap).

La Segunda Fase limó el filo revolucionario de ellas, pero sólo de una manera tímida. Respecto a la Reforma Agraria, no llevó adelante nuevas expropiaciones. Sin embargo, lejos de devolver las tierras confiscadas a sus legítimos dueños, redujo aún más las extensiones inafectas, siendo aplaudida por los sectores radicales de la opinión pública.

Respecto a la Reforma de la Empresa, la Segunda Fase pulió su carácter colectivista, al crear las acciones laborales. Éstas otorgaban a los trabajadores derecho a participar individualmente en las utilidades de la empresa, pero no a acudir a la Junta de Accionistas. Sin embargo, esta corrección no fue completa, ya que la Comunidad Laboral siguió teniendo representantes en los Directorios.

En razón de estas medidas, en mayo de 1977, agotada la capacidad de endeudamiento externo del país, la producción ya empezaba a entrar en declive y la falta de confianza de los empresarios en las reglas de juego empezaba a sentirse. Este panorama se complicaba aún más, en efecto, con la situación del sector externo de la economía. El Perú ya empezaba a tener serios déficit en su balanza de pagos. El escaso ingreso de divisas anunciaba que el Perú podía dejar de honrar los créditos que había recibido de la banca internacional.

El endeudamiento externo había crecido, sobre todo, durante los últimos tres años de la Primera Fase. En 1972, la deuda externa del Perú era 3,832 millones de dólares. Mientras que, entre 1973, 1974 y 1975, ella subió a 4,133, a 5,238 y a 6,257 millones de dólares. En 1976, ya con Morales Bermúdez de Presidente, llegó a 7,384 millones de dólares.

Así, empezaron entonces a buscarse contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destinados a evitar un cuello de botella en la balanza de pagos del país. No obstante, los ajustes que aconsejaba establecer el FMI eran considerados políticamente inviables por Barúa.

El problema central eran las cifras referidas al déficit fiscal y las metas de inflación. Mientras el FMI pensaba que únicamente era aceptable, por ejemplo, una meta de inflación anual de 15 por ciento, el MEF sólo se quería comprometer a conseguir reducir ésta a 25 por ciento para 1977. Asimismo, también existían discrepancias respecto a los subsidios a la gasolina, que el FMI quería eliminar.

Estos desacuerdos entre el FMI y el MEF constituyeron los problemas más apremiantes que recibió Piazza.

4. La convocatoria a Piazza

Producida la renuncia de Barúa, Morales Bermúdez pidió a la Junta de Gobierno que propusiera un sucesor. Ésta era una especie de supra Consejo de Ministros y de bisagra entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Entonces, estaba presidida por el mismo presidente de la República e integrada por el presidente del Consejo de Ministros, general Guillermo Arbulú Galliani, el ministro de Aeronáutica, general Dante Poggi Morán, y por el ministro de Marina, contralmirante Jorge Parodi Galliani.

Luego de deliberaciones en las que se dice que se consideró también el nombre de Carlos Rodríguez Pastor, la Junta acogió la propuesta (aparentemente, de Parodi) de convocar a Walter Piazza Tangüis. Fue así que Arbulú llamó a Piazza, a quien no conocía personalmente, para pedirle que se reuniera con el Presidente, para tratar del relevo en la cartera de Economía y Finanzas. La noche de dicha llamada, Piazza convocó a su casa, para discutir este pedido, a algunos de sus mejores amigos —entre ellos, a Félix Navarro Grau y a Felipe Ortiz de Zevallos M.

Entonces, Navarro Grau era su abogado y socio principal del Estudio Navarro. Por su parte, Ortiz de Zevallos trabajaba, desde hacía algunos años, en P.&V. Ingenieros S.A., con Valdez, socio de Piazza. Ellos dos, junto con el ingeniero Jorge Camet Dickman, conformarían el equipo de asesores que éste llevaría al MEF.

Piazza estaba sorprendido. Sabía del interés de Morales Bermúdez por mantener el MEF en manos de civiles, pero jamás pensó que —después del incidente de CADE '72 — él sería convocado. Sin embargo, luego de escuchar a sus amigos y evaluar los riesgos que entrañaba la situación del país —especialmente, la posibilidad de que se llegara a una moratoria en el pago de la deuda externa—, acudió a entrevistarse con el Presidente, pensando que "entrar a un cargo será siempre más fácil que salir".

En la reunión, Morales Bermúdez, luego de referirse a las cualidades de Piazza como líder empresarial, le pidió que se hiciera cargo del MEF. Piazza, luego de agradecer el pedido, dijo que tenía dos condiciones para hacerlo: primero, que el gobierno de las

Fuerzas Armadas asumiera el compromiso de enfrentar la reacción social al ajuste, sin echarle la culpa a gobiernos anteriores ni a circunstancias nacionales o internacionales por ello, asumiendo plenamente su responsabilidad; y, segundo, que el gobierno incorporara más civiles al gabinete.

Ambas condiciones apelaban al liderazgo de Morales Bermúdez. En 1977, el movimiento sindical peruano tenía un gran poder de convocatoria. A lo largo de los siete años de velasquismo, este poder se había fortalecido en distintas huelgas y paros generales. Contando con la simpatía in pectore del gobierno, el sindicalismo había llegado a convertirse en un factor político decisivo.

El contexto ideológico antes descrito era, además, favorable a una fuerte reacción sindical, que satanizaría al gobierno por el costo social que necesariamente tendría que tener el programa de ajuste. Sería muy difícil que se aceptara con serenidad que el remedio era necesario para atacar las enfermedades que venían aquejando a la economía peruana.

Por otro lado, a las alturas de mayo de 1977, Morales Bermúdez no había precisado la fecha en que se devolvería el poder a los civiles. Existía sólo la vaga idea de que, en algún momento, así se lo haría. El pedido de incorporar más civiles al gabinete ministerial significaba presionar al gobierno por una mayor apertura hacia la sociedad civil.

No obstante ello, Morales Bermúdez aceptó, con gran sentido de responsabilidad, ambas condiciones, "para resolver la grave crisis que el país enfrentaba". Luego, Piazza aceptó encargarse del MEF.

Tal como se ha anotado, la juramentación del nuevo ministro tuvo lugar el 17 de mayo de 1977. Al día siguiente, al acudir al ministerio, Piazza encontró un completo informe de salida realizado por Barúa. Allí se explicaba claramente la situación de la economía a abril de 1977. Asimismo, en entrevista personal, Barúa expuso, con mucha generosidad, los detalles del estado de las negociaciones con la misión del FMI, así como la dura posición de la Comisión presidida por el general Ibáñez.

En los días siguientes, Piazza recogió varios informes interministeriales sobre la situación de los distintos sectores de la economía. Del mismo modo, el INP envió un documento que contenía un análisis de la situación de la economía peruana, vista en una amplia perspectiva histórica.

El informe del INP se remontaba hasta 1973, para señalar el inicio de los desequilibrios de la economía peruana. Según éste, los orígenes de la crisis estaban tanto en factores estructurales como de manejo económico. La crisis se manifestaba en dos desequilibrios reales: de un lado, uno entre la oferta y la demanda interna; de otro, uno entre el ahorro y la inversión. Sumada a la crisis internacional derivada del petróleo, estos desequilibrios generaban otros desequilibrios derivados: brecha externa, brecha fiscal e inflación.

El documento también indicaba que la tasa promedio de crecimiento del PBI había venido disminuyendo desde los inicios del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entre 1968 y 1970, estuvo por encima del 6 por ciento anual; entre 1970 y 1973, sólo superaba el 5 por ciento; entre 1973 y 1976, sólo el 4 por ciento; y, entre 1976 y 1978, parecía que apenas pasaría de 3 por ciento. Era un declive lento pero continuado —señalaba el informe.

El diagnóstico de la situación de la economía que ofrecía el INP era bastante completo. Sin embargo, la terapia que recomendaba erraba en puntos fundamentales. Proponía mayores controles y regulaciones a la actividad económica, abogaba por mantener los subsidios tanto a los fertilizantes y a los productos agrícolas como al petróleo y sus derivados, y aconsejaba tasas de cambio múltiples.

Era claro que el INP estaba copado por técnicos equivocados en conceptos básicos de economía. Sus propuestas tenían una orientación estatista, que reclamaba un rol aún más intervencionista del gobierno en la economía. Piazza discrepaba con esas recomendaciones no sólo por razones programáticas sino por cuestión de principios.

Piazza recibió también copia de un extenso informe que el Subcomité Económico del Coap había preparado en febrero de 1977, para Barúa. Entonces, éste era presidido por el general Carlos Quevedo. El informe del Coap era también sumamente realista. Terminaba diciendo:

> "(...) se puede prever (sic) una agravación de las tensiones sociales durante 1977 y una recesión económica interna cuya intensidad sobrepasará el objetivo global de estabilización. A corto plazo esta situación conducirá hacia un nuevo orden socioeconómico y propiciará necesariamente la implementación de un nuevo esquema político durante los próximos años"14.

No obstante, en el capítulo final, Recomendaciones, el documento no planteaba soluciones concretas, que estuvieran a la altura de los problemas que el mismo describía. El más llamativo, entre los muchos vacíos que tenía este capítulo, era el referente a los hidrocarburos. No proponía nada respecto a los subsidios que entonces recibía la gasolina. Planteaba, pues, medidas correctivas incompletas.

El informe más certero y preciso de todos los que recibió Piazza fue el preparado por el BCR. Éste evaluaba el Programa de Estabilización y Reactivación Económica que había implementado Barúa a partir de junio de 1976. Especialmente, analizaba el impacto que había tenido la política monetaria de minidevaluaciones que se habían llevado adelante.

Luego de dicha evaluación, el informe del BCR señalaba que ese primer Programa había estado logrando algunos resultados, pero proponía, sin embargo, tres correcciones al mismo. Ellas eran: mantener el gasto público dentro de su límite financiable; cerrar la brecha financiera de Petroperú; y, mantener el nivel de importaciones a un nivel razonable. En función de ello, proponía establecer límites al endeudamiento externo.

Luego de revisar todos estos informes, Piazza tenía ya una idea clara de cuan profunda era la crisis financiera que afrontaba el país. Ciertamente, la situación era más grave de lo que desde fuera había estimado. Por ello, pidió a Morales Bermúdez reunirse de inmediato con la Junta de Gobierno, para presentar un Programa de Emergencia.

Esta reunión se realizó el 30 de mayo de 1977, a menos de dos semanas de haber asumido Piazza el cargo. En la misma, Piazza afirmó:

> "Debido a la premura de la situación, considero que el Programa de Emergencia aquí propuesto debe ser adoptado inmediatamente por la Junta de Gobierno y a continuación acordado en una reunión extraordinaria de Consejo de Ministros el día de mañana"15.

La Junta de Gobierno aceptó el pedido de reunir al día siguiente, de manera extraordinaria, al Consejo de Ministros. Allí, finalmente, Piazza expuso el Programa de Emergencia que había elaborado, en doce días de intenso trabajo, con el equipo de asesores que había llevado al MEF.

5. La situación política del Perú en 1977

En 1977, el panorama de la economía peruana era, en sí mismo, preocupante. Sin embargo, resultaba agravado por la situación política del país. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas constituyó una auténtica dictadura. No sólo había derrocado al Presidente de la República, cerrado el Parlamento y destituido a la Corte Suprema. Además, no había respetado la libertad de expresión y de prensa, confiscando o clausurando medios de comunicación, y deportando a periodistas críticos16.

Las ideas socialistas que aplicó el gobierno militar no fueron concepción propia. Ellas comenzaron a circular en el Perú a fines de la década de los veintes, gracias a los escritos de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, pero, sólo en la década de los sesentas, éstas empezaron a ser aplicadas en la economía peruana.

En 1962, cuando una Junta Militar interrumpió el proceso democrático, se dictaron ya las primeras medidas que pueden ser calificadas como estatistas, entre las que destaca la creación del Instituto Nacional de Planificación (INP). Este organismo no tenía, por supuesto, objetivos intrínsecamente perversos. Pero, en manos del gobierno de Velasco, su labor resultó perjudicial para el país17.

El INP no llegó nunca a hacer una labor de planificación compulsiva sobre la actividad económica del sector privado, pero propició la sobreregulación de la actividad económica, generando la proliferación de controles y prohibiciones, y produciendo la inhibición de los agentes económicos.

En 1963, el arquitecto Fernando Belaunde Terry, líder de Acción Popular (AP), conquistó, por primera vez, la Presidencia de la República. En esos comicios, AP representó la izquierda del espectro político, aliada como estaba con la Democracia Cristiana (DC), encabezada por Héctor Cornejo Chávez, quien terminaría siendo uno de los principales asesores de Velasco.

La alianza AP—DC se rompió a la mitad del gobierno de Belaunde, cuando la DC no quiso avalar la primera Ley de Reforma Agraria de 1965, a la que consideró tímida. El impulso de las ideas estatistas se evidenció también en las elecciones complementarias al Parlamento de 1967, en las que un candidato de extrema izquierda, el ingeniero Carlos Malpica Santis-teban, consiguió cerca del 20 por ciento de los votos.

Fue en ese contexto que se realizó el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. El Manifiesto del mismo no anunciaba la intención de enrumbar al país hacia un modelo de desarrollo ni capitalista ni socialista. Sin embargo, sí lo harían documentos posteriores —especialmente, a partir de 197018.

En 1968, no se realizaban encuestas de opinión pública. No obstante, distintos testimonios de la época coinciden en señalar que el golpe tuvo un respaldo pasivo en la opinión pública, que obedeció a dos explicaciones distintas19.

Para ciertos sectores de la población, el atractivo del 3 de octubre derivó de la esperanza de que pusiera orden en el país. En 1968, el gobierno de Belaunde había perdido mucho su capacidad de dirección. No teniendo mayoría en las cámaras legislativas, dominadas por la coalición APRA-UNO, sus gabinetes ministeriales eran derribados una y otra vez. Existía, pues, una gran inestabilidad política.

De otro lado, algunos otros sectores también apoyaron el 3 de octubre por su retórica nacionalista y radical. La prédica de pensadores y movimientos políticos como los indicados —u otros, como el Partido Social Progresista, liderado por profesores del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM)— había calado en la opinión pública.

Además, tales prédicas eran alentadas por el cambio de valores ocurrido en el mundo occidental durante los años sesentas. En Estados Unidos, la Casa Blanca tuvo como inquilinos, entre 1960 y 1968, a líderes del Partido Demócrata. El primero de ellos, el presidente John F. Kennedy desarrolló —sobre todo, en su política exterior hacia América Latina— una retórica idealista, que inflamó el romanticismo de la región.

Para América Latina, aún más importante que ello fue el impacto del Concilio Vaticano II. Convocado por el Papa Juan XXIII, este Concilio apuntó en la dirección seguramente acertada del "aggiornamiento", de la adaptación del catolicismo al mundo moderno.

Sin embargo, esa actitud de apertura de alguna manera dio pie al surgimiento de movimientos eclesiásticos radicales.

Fue entonces que surgió la llamada Teología de la Liberación, que alcanzaría gran popularidad en la década siguiente. En Colombia, el sacerdote Camilo Torres no tardó, por ejemplo, en tomar las armas y unirse a la guerrilla de su país. Asimismo, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez se convertiría en el vocero más importante, a nivel mundial, de dicha ideología.

Así, a finales de los sesentas, el alma de América Latina estaba capturada por las ilusiones del Estado Benefactor, al que Octavio Paz llamaría luego el Ogro Filantrópico20. La Teoría de la Dependencia, concebida por Raúl Prebisch a fines de los cincuentas, fue replanteada entonces por sociólogos brasileños como Fernando Henrique Cardoso y Theotonio Dos Santos, como un agresivo combate contra el imperialismo norteamericano21.

Ese ambiente ideológico contribuye a explicar el impulso que tuvieron las reformas estructurales del gobierno de Velasco. Este impulso fue aún mayor, como se ha anotado, debido al carácter dictatorial del mismo. Otros países de la región, como Chile y Bolivia, transitaron también por el camino hacia el socialismo, pero la naturaleza democrática de sus gobiernos determinó que ellos no llegaran tan lejos.

El gobierno de Velasco fue, poco a poco, volviéndose más y más autoritario. En 1968, empezó por deportar a Argentina al presidente Belaunde y clausurar al Parlamento y, en 1969, destituyó a todos los vocales de la Corte Suprema de la República. Esto fue sólo el comienzo, pues el mismo año sancionó el Estatuto de Prensa, que le sirvió de instrumento para deportar a críticos del gobierno.

Al año siguiente, Velasco confiscó los diarios Expreso y Extra, que fueron entregados a sus más radicales simpatizantes. Asimismo, en 1971, el gobierno confiscó las empresas de televisión privadas, puesto que obligó a sus dueños a que le vendieran al Estado el 51 por ciento de su capital. Los empresarios de televisión que se negaron a hacerlo tuvieron que irse del país.

Un paso crucial fue la creación del llamado Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), cuyo pomposo nombre ocultaba mal su propósito de dotar a Velasco del partido político que no tenía. En el mencionado CADE '72, su director, el general Leonidas Rodríguez Figueroa —como ya se ha indicado— presentó una ponencia francamente socialista. Sinamos fue conocido, desde entonces, como "la aplanadora".

El golpe final a la libertad de prensa ocurrió el 27 de julio de 1974. Velasco confiscó entonces los diarios aún independientes —incluyendo El Comercio y La Prensa—, entregándolos, teóricamente, a los sectores sociales organizados —agricultores, universitarios, etcétera. En la práctica, sin embargo, ellos pasaron a intelectuales y periodistas amigos del gobierno.

Al llegar a Palacio, Morales Bermúdez empezó un cauteloso desmontaje de este tremendo aparato que monopolizaba el poder político. Con extrema cautela, fue despidiendo a los revolucionarios más extremistas de la dirección de los diarios parametrados, las empresas públicas y la dirección de los organismos de gobierno, a quienes reemplazó con personalidades más democráticas y moderadas.

Sin embargo, Morales Bermúdez no llegó nunca a devolver una plena libertad de prensa al país. Si bien en sus últimos años de gobierno, el debate político fue sumamente abierto y plural, los diarios y canales de televisión no fueron devueltos a sus propietarios. Además, durante su gobierno se realizaron nuevas deportaciones de hombres de prensa y clausuras de medios periodísticos independientes.

Puede decirse entonces que, hacia 1977, el sistema político peruano era uno entrabado. Los únicos medios de comunicación en los que se discutía abiertamente la situación política del país eran revistas semanales o quincenales —como Equis X, Caretas, El Tiempo y Opinión Libre— y algunas radioemisoras.

Esta concentración de poder determinaba que la orientación que tomara el gobierno resultaba absolutamente fundamental. No habiendo espacios de crítica, aumentaban las posibilidades de que los errores del gobierno fueran de gran escala. Al renunciar Barúa al MEF, muchos líderes temían, en efecto, que el gobierno militar se embarcaría en una nueva etapa de estatismo.

Esa amenaza la personificaba el general Gastón Ibáñez O'Brien, presidente de la Comisión Ministerial que jaqueó a Barúa. Ibáñez era un destacado militar de carrera. Quince años más tarde, sería también un destacado editorialista del diario Expreso. Sin embargo, en ese entonces, tenía conceptos de economía imbuidos de las doctrinas heterodoxas dominantes, oponiéndose, por ejemplo, a la devaluación de la moneda.

6. El Programa de Emergencia

Piazza presentó a la Junta de Gobierno y al Consejo de Ministros un Programa de Emergencia que tenía como propósito atacar la crisis financiera del Perú. Estaba concebido, pues, como un paquete de medidas para solucionar los problemas de corto plazo de la economía peruana.

Luego de un breve debate de algunos de sus puntos, dicho programa fue aprobado en ambas instancias. En el Consejo de Ministros, lo más discutido no fueron tanto las medidas de ajuste como los aumentos de remuneraciones que se proponían para paliar su impacto social. Luego de un pulseo, estos aumentos fueron elevados respecto de la propuesta del ministro.

Luego de conseguir este respaldo, Piazza preparó un mensaje al país, con el que anunciaría y explicaría el Programa de Emergencia. Éste sería transmitido por todos los medios de comunicación del gobierno
—esto es, diarios, canales de televisión y algunas estaciones de radio.

Antes de leerlo al país, Piazza presentó el texto a Morales Bermúdez. El mismo contenía, como se verá luego, un serio cambio en el lenguaje que hasta entonces había utilizado el gobierno militar. Sin embargo, Morales Bermúdez no le pidió que modificara absolutamente nada, señalando que quería arreglar el problema financiero del país de una vez.

Así, Piazza habló al país el 10 de junio de 1977. El mensaje de Piazza no tuvo, en su forma, mucho parecido con los que vendrían después. Como pieza oratoria, fue de una sencillez y transparencia notables. Esta claridad no era sólo una cuestión de estilo, casual, sino, más bien, una opción deliberada. En sus primeras frases, declaró:

> "No quiero hoy entrar al detalle de muchos cuadros y cifras. Los problemas económicos fundamentales no deben explicarse en forma muy compleja. Como empresario, prefiero evitar los tecnicismos y hablarles en términos simples, con claridad y sinceridad. Conocer la realidad, por dura

> que ella sea, siempre es el mejor camino para efectuar un diagnóstico certero"22.

Luego, pasó a exponer cuál era la realidad económica del país. Al hacerlo, presentó primero los problemas financieros o coyunturales y, luego, los problemas económicos o estructurales del país —aunque planteó un Programa de Emergencia, no quiso dejar de presentar un panorama general de la economía.

Piazza identificó cuatro problemas financieros y cuatro problemas estructurales. Los primeros eran los siguientes: inflación (incremento constante en el nivel de precios), déficit (diferencia entre ingresos y egresos), falta de liquidez en el sector privado (restricción del crédito) y déficit en la balanza de pagos (que registra el ingreso y salida de divisas).

Piazza enfatizó mucho los efectos perniciosos de la inflación: "La inflación —nunca debemos olvidarlo— perjudica a los que menos ganan, en beneficio de los que especulan", dijo. Asimismo, señaló que la restricción de crédito al sector privado estaba íntimamente vinculada a la inflación y al déficit presupuestal.

Respecto al déficit en la balanza de pagos, Piazza indicó que éste se había agravado por el hecho de que el país había llegado al límite en su capacidad de endeudamiento con el exterior. El servicio de la deuda externa llegaba, en 1977, al 40 por ciento del monto de nuestras exportaciones. "Este porcentaje es uno de los más altos entre los países de todo el mundo", afirmó.

Luego de presentar estos problemas financieros, Piazza indicó que ellos eran sólo expresión de otros problemas más profundos, de índole económica. "Pretender resolver la crisis financiera sin preocuparse de los problemas económicos es, simplemente, postergar el momento de la verdad", añadió. Así, pues, pasó a analizar estos problemas de fondo.

Según Piazza, los problemas económicos que enfrentaba el Perú, en 1977, eran los siguientes: el riesgo de estancamiento en el crecimiento; la falta de ahorro interno; el equivocado rol de la planificación; y el crecimiento desmedido del aparato estatal.

Al desarrollar este análisis, en uno de los pasajes más notables de su mensaje, Piazza atacó directamente los equivocados criterios de desarrollo del gobierno militar. Regresando a la idea central de su discurso en CADE '72, dijo:

> "El aumento en la producción y en la productividad, así como las utilidades generadas a través de actividades legítimas, fruto del esfuerzo y la creación promotora, en un medio riesgoso y con muchas incertidumbres, no deben ser considerados, en forma injusta y absurda, como hechos vergonzosos y anti-sociales. Esta actitud frustra el espíritu creador y la vocación empresarial y de trabajo"23.

Luego señaló que la tasa de ahorro en el Perú llegaba sólo al 10 por ciento del PBI. Para enrumbar al desarrollo es necesario, añadió, elevar esta tasa a 25 por ciento, tal como lo habían hecho Japón y Alemania desde la posguerra. Sólo el ahorro interno que se pueda generar, no los créditos que se puedan obtener en el extranjero, permitirá un desarrollo auténtico, indicó.

Respecto a la planificación, indicó que ésta debía cumplir un rol esencial en el país: identificar prioridades. "No hay nunca suficientes recursos para hacer todo simultáneamente", dijo. En el Perú, lamentablemente, la planificación estatal no había contribuido a identificar prioridades sino a programar dispendios en proyectos de desarrollo faraónicos.

Finalmente, respecto al crecimiento del aparato estatal, indicó que éste venía dándose de manera desmesurada tanto en la administración pública como en las empresas estatales. "El querer abarcarlo todo ha disminuido la eficiencia y la productividad. El manejo del aparato estatal se ha complicado tremendamente", afirmó.

Después de este diagnóstico de la situación económica del país, pasó a responder a la pregunta sobre qué hacer frente a ella. Al hacerlo, también siguió la misma lógica empleada en el diagnóstico: expuso primero, y en detalle, las medidas que se tomarían frente a la crisis financiera del país, y añadió luego un esbozo de las soluciones a los problemas económicos.

Para solucionar el problema del déficit fiscal, sólo existían dos alternativas: aumentar los ingresos o reducir los gastos. La primera suponía elevar los impuestos, lo cual podría tener efectos recesivos aún mayores. Aunque se perseguiría a los evasores de impuestos, no sería ésa la política más acertada para enfrentar el déficit, dijo.

Así, sólo quedaba la segunda opción:

> "El recorte de gastos es, pues, nuestra mejor alternativa. El Estado debe dar el ejemplo en este esfuerzo de reordenamiento de la economía nacional. Solamente si el Estado adopta y practica una política de austeridad, podrá exigir a todos los peruanos su cuota de sacrificio"24.

El Programa de Emergencia tenía, por tanto, los siguientes objetivos: 1º reducir los gastos del gobierno; 2º eliminar la pérdida de Petroperú; 3º reducir los gastos de la Defensa Nacional; 4º no efectuar ajustes bruscos en la tasa de cambio; 5º compensar, en parte, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población; y 6º concertar, en condiciones adecuadas, un préstamo de 250 millones de dólares, para equilibrar la balanza de pagos.

Los primeros tres puntos eran, indudablemente, los fundamentales. Se trataba del primer ajuste severo al gasto público y al aparato estatal. Piazza indicó que era consciente de que estas medidas llevarían a un aumento en el precio de los alimentos y del transporte. Ello era, sin embargo, inevitable.

No obstante la importancia de aplicar con seriedad el Programa de Emergencia, Piazza dijo que éste no sería suficiente para volver a enrumbar al país hacia un desarrollo sano. Por ello, anunció que, "en un futuro cercano, debe aprobarse un programa de estímulo y desarrollo, que incluirá aquellas medidas que son necesarias para definir la proyección de nuestra situación actual y que nos permitan afrontar el futuro con esperanza".

Estas medidas estarían orientadas a generar y restablecer la confianza de los agentes económicos. Volvió, entonces, al tema central de su discurso en Paracas, en 1972: la motivación empresarial. Ella había sido, pues, seriamente afectada por el modelo de desarrollo colectivista del gobierno militar.

Sin embargo, a pesar de la gravedad del contenido de su discurso, Piazza terminó con frases de optimismo: “Tengo confianza en la capacidad de los profesionales, empresarios y trabajadores peruanos para sacar sus empresas adelante. No hay que tenerle miedo al futuro. El futuro es nuestro reto. Salgamos a hacerle frente”, dijo. “Renuevo y declaro mi fe en el destino del Perú”, concluyó.

7. La aplicación del Programa

El Programa de Emergencia anunciado al país por Piazza tuvo un gran impacto en la opinión pública. Aunque ya en junio de 1976 Barúa había aplicado un primer ajuste a la economía peruana, el de Piazza fue uno sustantivamente más severo.

El Programa de Emergencia propiamente dicho consistió en seis Decretos Leyes que aparecieron publicados el mismo 10 de junio de 1977 en el diario oficial El Peruano, que circuló al día siguiente del mensaje televisivo de Piazza. En estos dispositivos, las medidas de austeridad y sacrificio anunciadas por Piazza eran detalladas en su significado y alcances concretos.

Las medidas de austeridad estuvieron contenidas en los Decretos Leyes, el 21861 y el 21863, aprobados por todo el gabinete ministerial, y que llevaban las firmas del Presidente de la República, de los integrantes de la Junta de Gobierno y del ministro de Economía y Finanzas.

El Decreto Ley 21861 contenía la primera gran decisión: detener el dispendio en el Sector Público. Así, prohibió efectuar nuevos nombramientos; celebrar contratos de servicios profesionales en todas sus formas y modalidades; crear, modificar o recategorizar plazas o cargos; y efectuar reasignaciones a cargos de mayor remuneración básica.

Asimismo, prohibió también que el Sector Público contrajera nuevos compromisos con cargo a las partidas de enseres y mobiliarios, excepto para equipar centros educativos, de salud y hospitalarios. Se trataba de no permitir, entonces, nuevas compras de bienes muebles25.

Por su parte, el Decreto Ley 21863, seguramente el más importante de todas las normas promulgadas, establecía una reducción de 8 por ciento en los gastos del Presupuesto General de la República para 1977. Además, autorizaba al Ministerio de Economía y

Finanzas para que realizara una reducción adicional en aquellos pliegos donde fuera factible.

La otra gran decisión del Programa de Emergencia estuvo contenida en la Resolución Suprema Nº 083-77-EM/DGH, publicada el 9 de junio de 1977, con la firma del ministro de Energía y Minas, general Arturo La Torre Di Tolla.

Esta resolución aprobó la primera alza del precio de la gasolina y demás derivados del petróleo verdaderamente importante. La gasolina de 84 octanos, la de mayor consumo popular, subió de cincuenta a setenta y cinco soles —esto es, algo más de 40 por ciento.

También elevó el precio de la gasolina de 95 octanos, así como el del kerosene y el gas licuado. Complementariamente, autorizó el alza del precio de los pasajes de transporte urbanos, en taxis, microbuses y ómnibus, que entonces eran totalmente controlados por el gobierno. Estas alzas eran en proporciones que iban del 30 al 50 por ciento.

Estas dos medidas de ajuste fueron, sin embargo, parcialmente amortiguadas por aumentos en las remuneraciones de los trabajadores del Sector Privado. Estos aumentos estuvieron contenidos en el Decreto Ley 21866 y eran establecidos en escalas progresivas de 15, 3 y 2 por ciento. Asimismo, este decreto otorgó a los trabajadores del Sector Público un aumento flat de 820 soles mensuales.

Como se ha dicho anteriormente, las escalas de estos aumentos fueron modificadas por el Consejo de Ministros, respecto de la propuesta de Piazza. Ellas dejaban un pequeño margen de desajuste de las cuentas fiscales, que Piazza pensó que más adelante podría ser resuelto. Se trataba, en todo caso, de paliar en algo el ajuste a los sectores más pobres.

El contenido del Programa de Emergencia fue bien recibido por los pocos que conocían a fondo la situación de la economía peruana —especialmente, el equipo de técnicos del BCR. Este equipo había sido testigo de cómo Morales Bermúdez había propiciado o, al menos, permitido la formación de la Comisión Ibáñez.

Luego de la renuncia de Barúa, los técnicos del BCR pensaron que el sucesor de Barúa se inclinaría por medidas parecidas, si es que no idénticas, a las que propugnaba dicha Comisión. Así, aunque ya sus primeras conversaciones con Piazza indicaban que esto

no sería así, los decretos leyes firmados por Piazza confirmaron la firmeza y autonomía de éste.

En realidad, el equipo del BCR que presidía Carlos Santistevan de Noriega tenía ya preparada su carta de renuncia, por si se hubiera anunciado un Programa similar al que propugnaba la Comisión Ibáñez.

No obstante esto, la reacción de la opinión pública, según se expresaba en los medios de comunicación, fue negativa. La revista Caretas señaló, por ejemplo, que "la decisión de aprobar aumentos salariales de dimensión homeopática es la bomba de tiempo del paquete de Piazza". Asimismo, afirmó que el precio de la carne "se fue a las nebulosas"26.

Caretas enfatizaba que el Programa Piazza contrastaba con el que había elaborado la Comisión Ibáñez como alternativa al de Barúa. El Programa Ibáñez, que implicaba una postergación de los problemas, incluía generosos aumentos de remuneraciones, ampliación de líneas de crédito en la banca comercial (entonces regulada por el gobierno) y el congelamiento del dólar.

La reacción desfavorable de los medios de comunicación radicales fue mucho mayor. El semanario comunista Unidad publicó un titular en su primera página que decía: "Piazza: Habló el Patrón". Luego, en sus páginas interiores, afirmaba: "El ministro Piazza habló como empresario. Por ello, (...) ignora (...) que la crisis económica y financiera se debe fundamentalmente a la elevada magnitud de los saldos negativos en la balanza de pagos (...)"27.

La revista Oiga, por su parte, decía, también en su carátula: "Sr. Piazza: un país no es una empresa". En las páginas interiores, criticaba duramente las medidas económicas y la presentación misma de Piazza en la televisión. Consistentes con la prédica antiempresarial del gobierno militar, éstos y otros medios satanizaron, entonces, al nuevo ministro.

Las interpretaciones periodísticas de la visita al Perú, en los primeros días de junio de 1977, de la primera dama de Estados Unidos, Rossalyn Carter, contribuyó a dar impulso a estas reacciones negativas. Los periodistas subrayaron, en efecto, que

algunos miembros de la comitiva de la señora Carter habían señalado que existía "una salida menos dra-coniana al grave dilema financiero" del país.

La señora Carter y su comitiva tuvieron expresiones de gran simpatía por el gobierno moderado de Morales Bermúdez, puesto que consideraron que era un régimen no comunista que buscaba la reforma social. Sin embargo, algunos miembros de dicha comitiva pudieron haber alimentado falsas expectativas entre algunos sectores de la prensa.

El impacto de estas declaraciones fue amplificado debido a que el anfitrión de la primera dama norteamericana, y vocero de sus buenos deseos, fue, precisamente, el otro civil del gabinete ministerial, el canciller José de la Puente Rabdill. Este hecho le dio mayor credibilidad a los comentarios sueltos de los funcionarios norteamericanos.

Robert Pastor, uno de estos funcionarios, conversó directamente con Piazza, en la Embajada de Estados Unidos, prometiéndole su apoyo en las gestiones que realizaría con Linda Koening, la funcionaria del FMI a quien Piazza había invitado para conversar en Lima en los días siguientes.

Un tercer escollo al Programa Piazza surgió el 9 de junio de 1977 —esto es, un día antes de la publicación de las medidas de austeridad en El Peruano—. Ese día, por Resolución Directoral suscrita por el director superior del Ministerio de Salud, en manos de la Fuerza Aérea, se nombró y ascendió a varios funcionarios públicos.

Por otro lado, el mismo día de la publicación de las medidas de austeridad, el 10 de junio de 1977, una Resolución de Gerencia del Seguro Social del Perú, actuando por delegación del presidente de la Comisión de Reestructuración del mismo, efectuó la contratación de centenares de nuevas personas.

Estos nombramientos y ascensos de último minuto resultaron enervantes para distintos sectores de la opinión pública. Ellos pusieron en evidencia de que existían, dentro del gobierno mismo, quienes pretendían sabotear su aplicación28.

Estas violaciones de la ley hicieron claro también una falta de coordinación con los demás ministros. Dio la impresión de que los militares no querían cerrar filas detrás de

las decisiones del nuevo ministro civil, encargado del portafolio de Economía y Finanzas.

Días más tarde, cuando Piazza se encontraba negociando con la delegada del FMI, la disminución de los subsidios se tradujo en un alza del costo de vida, que la revista Equis X tituló "El calvario de los precios"29.

No sólo los alimentos y el transporte subieron de precio. Pronto, como era de esperarse, los precios de todos los demás bienes y servicios —incluyendo el de los diarios parametrados— fueron también elevados. El caricaturista Heduardo apuntó: "Cómo será nuestra crisis que hasta la desinformación ha subido de precio".

8. Crisis y salida de Piazza

En los días siguientes, la marea política adversa al Programa de Emergencia siguió creciendo. El 19 de junio, por ejemplo, la Confederación Nacional Agraria —que agrupaba no a los agricultores sino a los llamados ex "sinamitas"— publicó un documento diciendo: "Consideramos que las medidas económicas propuestas por el ingeniero Piazza van a deteriorar aún más la economía popular, y que comprometen la satisfacción de las necesidades primarias (...)".

Asimismo, se realizaron paros y huelgas en distintas ciudades del interior. En Puno, por ejemplo, las labores escolares se suspendieron entre el 23 y el 30 de junio. Por otro lado, entre el 21 y el 23 de junio se realizó en Arequipa un paro general convocado por la Federación de Trabajadores de esa ciudad.

Los ataques a Piazza también continuaron. El Partido Socialista Revolucionario (PSR), otro bastión de ex "sinamitas", publicó un documento afirmando: "El Capitalismo quiere manejar el país sin intermediarios". Según éste, la diferencia entre Barúa y Piazza radicaba en que "Barúa era un intermediario sujeto a presiones políticas internas, (en cambio) Piazza es un representante directo de las transnacionales".

En ese ambiente de agitación social, el semanario El Tiempo anunció, a finales de junio, que la entonces poderosa Confederación General de Trabajadores del Perú y el Partido Comunista Peruano estaban preparando una "semana roja", para "desestabilizar al gobierno de Morales Bermúdez".

El gobierno reaccionó prorrogando el Toque de Queda que había implantado en mayo de 1977, a consecuencia de una huelga magisterial que duró todo el mes. El ministro del Interior, general Luis Cisneros Vizquerra, quien había mostrado una especial comprensión del Programa Piazza, llevaba el peso del enfrentamiento a la turbulencia política imperante.

En esos días, Piazza acudió al Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), a responder las inquietudes de los militares sobre la marcha de la economía. El CAEM había jugado un rol importante en la concepción de las reformas estructurales del gobierno militar. Entre las preguntas que se le hicieron, estuvo la siguiente:

> "(...) en anteriores oportunidades se han elaborado programas económicos que luego han sido mediatizados y anulados por consideraciones políticas, ¿qué acciones tomaría su despacho si ello sucediera nuevamente con el Programa de Emergencia (...)?"

Piazza respondió:

> "(...) haría un flaco servicio a mi país si avalara una mediatización o anulación de las medidas propuestas por razones políticas. (...) En ese caso, prefiero que alguien venga y me reemplace"30.

Esta respuesta trascendió, de alguna manera, a distintos medios de comunicación. Por ello, a partir de entonces, éstos empezaron a especular con que Piazza podía renunciar en cualquier momento.

En esos días llegó a Lima, Linda Koening, la funcionaria del FMI encargada de supervisar la marcha de la economía peruana. En cuanto había asumido el cargo, Piazza había solicitado a Carlos Rodríguez Pastor, quien trabajaba en la banca internacional, que concertara la visita de alguno de los funcionarios involucrados con el seguimiento de la economía peruana, para tratar de conseguir el respaldo de este organismo internacional.

Para preparar esta visita, el MEF y el BCR elaboraron un informe dirigido a H. Johannes Witteveen, director gerente del FMI, sobre la marcha de la economía peruana. Éste resaltaba que el Programa de Emergencia incluía un recorte en el gasto de armamentos, de más del 25 por ciento de lo programado, y enfatizaba que sólo se cumpliría con los contratos ya concertados. Estas medidas acompañaban las antes descritas, respecto del gasto público y los subsidios.

Ya en Lima, Linda Koening observó que el Programa de Emergencia sancionado por el gobierno se orientaba en la dirección del saneamiento de las finanzas públicas

peruanas. Sin embargo, consideró que, para recibir el apoyo del FMI, resultaba absolutamente indispensable que se dieran pruebas de la voluntad de ejecutar el Programa de Emergencia.

En ese sentido, dijo que el gobierno debía comprometerse a que las empresas públicas "no sólo dejasen de arrojar pérdidas, sino que generase como un todo 2,500 millones de soles de ganancias"31. Sin embargo, el punto aún más serio que planteó fue que "los diversos Sectores o Ministerios y Sistemas que conforman la administración pública no habían cumplido hasta ese momento, pura y simplemente, con la obligación legal y su compromiso de reducir sus gastos en un 8 por ciento (más un 2 por ciento adicional de reducción en ciertos casos)"32.

Piazza acordó con ella que plantearía al gobierno la necesidad de llevar adelante este ajuste, para que el déficit fiscal no excediera los 32,500 millones de soles. Este acuerdo se plasmó en un borrador de Carta de Intención dirigida al FMI, que contenía once pun-tos, referentes a metas respecto de los indicadores macroeconómicos que el país debía alcanzar en 1978.

Piazza informó de estas negociaciones a la Junta de Gobierno, a través de un nuevo informe del MEF. Éste advertía sobre los riesgos de que se mantuviera el déficit en la balanza de pagos. De ocurrir ello, el país incurriría en una moratoria en el pago de su deuda externa, con todas las consecuencias que ello originaría:

> "El tomar el camino de la moratoria significaría el descrédito internacional de nuestro país. La prensa internacional comentaría la falta de disciplina financiera del Perú. Los bancos podrían iniciar acciones judiciales y pretender el embargo de cuentas bancarias o bienes que el país tenga en el exterior. Por último, durante este período, todas las compras de bienes y servicios en el extranjero tendrían que efectuarse al contado".

Al concluir la lectura de este informe, sin embargo, Piazza no encontró el respaldo de la Junta de Gobierno. Especialmente crítico fue Poggi. Morales Bermúdez, por su parte, pidió a Piazza que presentara el asunto al Consejo de Ministros, pero sin darle el claro apoyo que anteriormente le había expresado.

Durante la mayor parte de la gestión Piazza, sólo Arbulú y Parodi mostraron una actitud favorable. Ello se debió, en alguna medida, a las gestiones previas realizadas por los asesores de Piazza. Navarro Grau tenía, por vínculos familiares, una relación cercana con la Marina. Por otra parte, Camet veraneaba en Punta Hermosa, donde también lo hacía su amigo, el general Arbulú. Ellos fueron los puentes de Piazza con la Marina y el Ejército.

Sin embargo, Piazza no tuvo en cambio contacto personal con la Aviación. Ésta pensó que sería afectada la compra de armamentos de aviones que tenía programada. Seguramente por ello, la reacción de Poggi frente a las propuestas de Piazza fue tan adversa.

Piazza hizo una segunda exposición ante el Consejo de Ministros sabiendo que las posibilidades de que se aprobaran las metas acordadas con el FMI eran remotas. Por eso, no pudo evitar que esta exposición estuviera cargada de emoción. Ella terminó con una arenga y una invocación a la racionalidad de sus colegas:

> "Señores: / Vivimos hoy un proceso inflacionario y sufrimos de un estancamiento en la producción que ha generado un mayor desempleo. / Para combatir la inflación hay que insistir en un severísimo programa de austeridad que se estrella contra demandas adicionales de un aparato burocrático muchas veces estéril que exhibe en algunos casos extremos increíbles de ineficiencia. / Para combatir el desempleo, hay que desencadenar entusiasmo por la causa nacional en promotores y creadores de empresas. / No me creo dueño de la verdad. Me gustaría recibir de mis colegas de gabinete críticas y sugerencias. Con una condición: que sean coherentes e integrales. Que señalen cómo van a combatir la inflación y cómo van a resolver el déficit de balanza de pagos. / Ni el Perú, ni su economía, aguantan más ensayos teóricos ni propuestas irreales. / Nos estamos jugando el futuro del país y el prestigio de sus gobernantes."

Esta exposición fue recibida con un largo silencio. Pero, en ese contexto, el silencio valía más que mil palabras. Luego de que Morales Bermúdez suspendiera la sesión, Piazza concluyó que ya no le quedaba nada por hacer en el gobierno.

Resultaba evidente que, tanto en la Junta como en el Gabinete, había indecisión frente a la necesidad de gobernar el país sin titubeos, asumiendo el costo social —como Piazza había solicitado al Presidente al momento de aceptar el cargo. Así no sería posible salir de la crisis en la que los gobernantes habían embarcado al país. En el trayecto a su casa, Piazza fue pensando, pues, en el tenor que tendría su renuncia.

El 6 de julio de 1977 Piazza llevó personalmente a Morales Bermúdez la carta en la que presentaba su renuncia irrevocable. Morales Bermúdez leyó la carta, agradeció a Piazza por su trabajo y aceptó la renuncia.

9. Los quince años siguientes

En los días siguientes, la renuncia de Piazza fue tema de discusión en todos los medios de comunicación. Inclusive el humorista Sofocleto se animó a ensayar una interpretación, apuntando en su columna periodística: "A Piazza lo sacaron porque en el Gabinete no les gusta que se les cuadre un civil".

Por su parte, el semanario El Tiempo señaló en su editorial: "Honda conmoción ha causado, dentro y fuera del país, el apartamiento del gobierno del ministro de Economía y Finanzas, señor Walter Piazza". Y concluyó: "En un momento particularmente duro, cuando el futuro nacional aparece incierto, hagamos votos porque Dios ilumine a la Fuerza Armada y le señale el camino correcto".

Asimismo, la revista Equis X dijo: "(...) debemos rendir homenaje a la lucidez y honestidad del ex ministro Piazza. Lo hacemos como hombres de izquierda, socialistas democráticos, que tenemos sin duda profundas divergencias ideológicas con él, pero que coincidimos con su política en algo muy concreto pero muy importante. A saber, que sin un mínimo de estabilidad económica la democracia resulta imposible (...)"33.

Sin embargo, no todos compartían esos sentimientos. El decano de la prensa peruana, el diario El Comercio, aún en manos de los amigos del gobierno, publicó un documento del Partido Comunista Peruano que decía: "(...) la renuncia del ingeniero Walter Piazza Tangüis a la cartera de Economía y Finanzas es una conquista del pueblo (...), el repudio a las recientes medidas económicas de emergencia se extiende a todo el país (...)".

Mientras tanto, el PSR, en un comunicado publicado en La Prensa, también parametrada, afirmó: "Nada se soluciona ni se corrige con la simple renuncia y reemplazo del señor Piazza. No es la persona del ministro renunciante la que rechazó el pueblo, sino a las medidas económicas impuestas por ese ministro. Los efectos

corrosivos de esas medidas continuarán debilitando al país mientras sigan en vigencia".

Esta variedad de reacciones evidenciaban que el rol de la ideología en el debate público peruano se-guía siendo, entonces, uno demasiado grande, y que el gobierno mismo protagonizaba dicha confusión.

Piazza fue reemplazado por el general Alcibiades Sáenz Barsallo, quien empezó su gestión anunciando la suspensión del sistema de minidevaluaciones. Ello provocó la inmediata renuncia del equipo directivo del BCR, presidido por Santistevan. En su lugar, fue nombrado Germán de la Melena, funcionario de carrera del BCR.

Sin embargo, a sólo dos semanas de la salida de Piazza, el gobierno militar descubrió que los anuncios populistas del nuevo ministro no eran suficientes para desactivar la turbulencia política. El 19 de julio de 1977, en efecto, se llevó a cabo, con gran éxito, el Paro General convocado por la CGTP.

Por ello, nueve días más tarde, el 28 de julio de 1977, Morales Bermúdez anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente para 1978, y señaló que estaba "(...) estudiando un cronograma que señale las pautas y fije las fechas para el cambio de gobierno (...) para permitir que en 1980, indefectiblemente, se lleven a cabo las elecciones generales".

La gestión Sáenz Barsallo desembocó aumentando el déficit presupuestal. En 1977, en efecto, éste alcanzó los 939 millones de dólares. Esta cifra fue, por supuesto, muy superior a la que el FMI estaba dispuesto a aceptar, para brindarle al Perú su apoyo financiero.

En marzo de 1978, el país enrumbaba inequívocamente hacia la moratoria de la deuda externa. Entonces, el gobierno militar, ya de salida, invitó de nuevo a un civil a ocuparse del MEF. El convocado fue Javier Silva Ruete, economista de larga trayectoria política. Junto con Silva Ruete, reingresó al BCR parte del equipo técnico que renunció a la salida de Piazza. Esta vez, Manuel Moreyra ocupó su Presidencia.

La gestión Silva Ruete fue sobresaliente por su refinanciamiento de la deuda externa, y por haber conseguido un alto nivel en las reservas internacionales peruanas. Ello facilitó la apertura democrática.

Pese a ello, esta gestión no pudo revertir la presión inflacionaria. En 1978 la inflación anual fue de 74 por ciento, mientras que en 1979 fue de 67 por ciento. El alza del precio de los minerales en los mercados internacionales (la onza de plata, por ejemplo, se elevó de 3 a 40 dólares) ayudó a poner en azul las cuentas de la balanza de pagos, pero hizo más difícil detener la inflación34.

Lo ocurrido en la economía peruana durante la década de los ochentas es historia reciente. En 1980, llegó al gobierno, por segunda vez, Fernando Belaunde Terry, líder de Acción Popular. Entonces, soplaban ya nuevos vientos en el pensamiento económico latinoamericano.

Mientras tanto, dentro y fuera del gobierno se albergaron demasiadas dudas sobre lo que se tenía que hacer. Así, aunque se corrigió la orientación estatista del gobierno militar, no se realizó —pese a los esfuerzos de titulares del MEF como Manuel Ulloa Elías y Carlos Rodríguez Pastor— una reforma estructural de la economía.

Las consecuencias de esta indecisión fueron agravadas por eventos de fuerza mayor. El mismo año, empezó a actuar el grupo terrorista Sendero Luminoso, realizando actos criminales de todo tipo contra la población civil y la infraestructura del país. En el curso del gobierno de Belaunde, Sendero Luminoso se convirtió en una verdadera amenaza para la sociedad civil y el Estado peruanos.

Asimismo, en 1983, la embestida del Fenómeno del Niño ocasionó sequías en el sur e inundaciones en el norte del país. Ello hizo colapsar a la anémica actividad agrícola. Acosado por el terrorismo y los desastres naturales, el Perú declaró —siguiendo el ejemplo de México de 1982— la moratoria del pago de su deuda externa.

Por tanto, razones fortuitas y no tan fortuitas determinaron que el gobierno de Belaunde terminara generando una gran frustración. Por ello, Javier Alva Orlandini, candidato de AP a la Presidencia de la República en 1985, consiguió sólo el 6 por ciento de los votos válidos.

En todo caso, el gobierno de Belaunde tuvo un impecable respeto por la institucionalidad democrática. Gracias a ello, el BCR, presidido por Richard Webb, tuvo gran autonomía. Webb frenó los ímpetus del gobierno populista por construir obras públicas, y logró mantener las reservas internacionales en niveles apropiados.

Empero, esto resultó, a la larga, un arma de doble filo. En 1985, el país cifró sus esperanzas en el viejo Partido Aprista Peruano, liderado por Alan García Pérez, un joven político de apenas 35 años. Una vez que cayeron en sus manos, las reservas internacionales no tardaron en hacerse humo.

El dispendio de estas reservas llevó a que el Perú experimentara una aparente recuperación en los primeros dieciocho meses del gobierno aprista. Sin embargo, en mayo de 1987, el agotamiento de las reservas era ya evidente, y produjeron el enfrentamiento entre García y el entonces titular del MEF, Luis Alva Castro, quien renunció abruptamente al cargo.

García llegó al 28 de julio de 1987 con una imagen desgastada. En medio de esas circunstancias, prestó oídos a sus asesores más radicales —entre ellos, el psicólogo social Carlos Franco—, quienes le ayudaron a creer que su gestión era saboteada por cuatro grupos de poder económico. Así, en el mensaje al Congreso, señaló que era preciso quebrar el espinazo a estos grupos, anunciando la estatización del sistema financiero.

Esto determinó la quiebra de la confianza del sector privado en el gobierno. Consecuentemente, entre 1988 y 1990, el Perú vivió una larga pesadilla. En esos tres años, experimentó una hiperinflación, cuyas cifras terminarían superando el 7,600 por ciento anual, y haciendo colapsar al aparato productivo peruano.

Al final del gobierno aprista, en términos económicos, el Perú había desandado quince años. Ello resultaba agravado por la acción de Sendero Luminoso, que seguía destruyendo la infraestructura del país, y asesinando hombres, mujeres y niños despiadadamente.

El país estaba también en la más completa soledad. Al asumir el cargo, el 28 de julio de 1985, García había anunciado, en tono desafiante, que pagaría la deuda externa sólo

hasta el límite del 10 por ciento del valor de las exportaciones peruanas. Esto contribuyó a que se diera la posterior declaratoria de inele-gibilidad del Perú por parte del FMI.

Sólo el gobierno siguiente, presidido por Alberto Fujimori, atinó, finalmente, a sacar al Perú de esta pesadilla estabilizando la moneda, conduciendo una reforma estructural de la economía y combatiendo frontalmente al terrorismo.

Sin embargo, el costo de estas medidas fue mayor al que nadie habría imaginado en 1977. Para cerrar el déficit fiscal, fue preciso, el 8 de agosto de 1990, subir el precio de la gasolina de 84 octanos en 3,300 por ciento. Asimismo, para detener al terrorismo, se necesitó dar una legislación excepcionalmente dura, que incluyó tribunales militares, jueces sin rostros y penas de cadena perpetua. Ésta fue sancionada durante el paréntesis del orden constitucional ocurrido entre el 5 de abril y el 31 de diciembre de 1992.

10. Conclusiones

¿Qué hubiese ocurrido si Walter Piazza Tangüis hubiera podido aplicar no sólo el Programa de Emergencia sino también el Programa de Desarrollo que había llegado a esbozar? Al historiador Jorge Basadre le hubiese interesado ensayar una "ucronía" de este tipo. Seguramente, el esbozo más claro de respuesta lo habría encontrado en lo ocurrido en Chile.

En 1976, un año antes de que sucedieran los eventos aquí narrados, Chile se embarcó en un programa económico similar al que propuso Piazza. El mismo tuvo también una primera etapa de restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, y una segunda de reforma económica propiamente dicha, a través de la liberalización y apertura de la economía, y la privatización de las empresas estatales.

Los resultados económicos y sociales de este modelo de desarrollo no fueron inmediatos, pero en los momentos en que se escriben estas líneas, los indicadores económicos y sociales de desarrollo que exhibe Chile son superiores a los alcanzados por ningún otro país de la región. En muchos sentidos, Chile empieza ya a ser parte del mundo desarrollado.

Ahora bien, aunque todos reconocen el éxito del modelo de desarrollo chileno, algunos afirman todavía que el mismo tuvo un costo social demasiado alto. A ellos cabría recordarles que la otra ruta —la de la heterodoxia económica y la ampliación ilimitada de los servicios sociales brindados por el Estado Benefactor— ha tenido también, como la experiencia peruana señala, un costo que es varias veces superior al pagado por Chile.

Por ese motivo, debe también señalarse que, aunque Francisco Morales Bermúdez fue el gran artífice de la transición hacia la democracia, tuvo una visión muy particular de su función como Presidente de la República. Según ésta, más que como un líder o un ejecutor, él se veía a sí mismo como un negociador o concertador, que concebía a la política, ante todo y sobre todo, como la búsqueda de un consenso razonable.

Esta manera de entender la política entró en conflicto con la de Piazza. Éste era un empresario. Por ello, diríase que había desarrollado el hábito de tomar decisiones. Piazza tenía especialmente claro cuan importante era no sólo tomar decisiones acertadas sino también hacerlo en los momentos precisos.

Para Piazza, el seguir vacilando interminablemente sobre el curso por el que había que enrumbar al país aumentaría, a la larga, el costo de hacerlo. Por más incomprensión que pudiera existir, el postergar la decisión del ajuste de la economía peruana y el cambio de modelo de desarrollo sólo llevaría a complicar la situación.

Por eso, recomendó ajustar la economía peruana a sus verdaderas posibilidades de desarrollo, confiando en unos pocos y bien definidos principios de organización económica. Si hubiera que resumir éstos de manera telegráfica, diríase que podían reducirse a uno sólo —la superioridad del libre mercado como el mecanismo de asignación de recursos más eficiente y, sobre todo, de promoción de la actividad innovadora35.

Ahora bien, en esta confrontación de estilos e ideas, las tendencias de Morales Bermúdez resultaron primando no sólo por su más alta investidura política sino también —como se podrá desprender de todas estas páginas— por el clima ideológico imperante, y por la naturaleza castrense y dictatorial del gobierno. Indudablemente, estas circunstancias externas a las personalidades de Morales Bermúdez y Piazza tuvieron también una gravitación crucial.

Nunca la izquierda peruana fue más vocinglera que durante la Segunda Fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. En esos años, proliferaron publicaciones que aseguraban, con un sentido escatológico arrogante, la inevitabilidad del socialismo. Entonces, lo único que ellas discutían era qué socialismo resultaba conveniente: si el ortodoxo (soviético o chino) o el democrático (en sus distintas presentaciones europeas).

Por otro lado, debido al carácter dictatorial del gobierno, no era posible la fiscalización del Parlamento o, siquiera, de la prensa. No sólo los principales medios de comunicación estaban parametrados. Además, al periodismo independiente de entonces le resultaba casi imposible hacer una evaluación completa del impacto de las

políticas económicas, debido a que sólo los más altos funcionarios del gobierno tenían acceso a las estadísticas económicas. Los militares tenían una inclinación diríase que congénita a tener información clasificada.

¿Cómo se podían cambiar estas ideas equivocadas y este conocimiento incompleto sobre el funcionamiento de la economía? Al dejar el MEF, Piazza retornó a sus responsabilidades al frente de Cosapi. En la segunda mitad de los ochentas, ésta se convirtió en COE (Cosapi Organización Empresarial), un holding de empresas cuyo volumen anual de operaciones supera hoy los 130 millones de dólares, y que da trabajo, dentro y fuera del Perú, a más de 3,500 personas.

Sin embargo, al mismo tiempo, Piazza consideró que no era suficiente que un empresario predicara con el ejemplo de su empresa las bondades de una economía libre. No, además era preciso seguir participando en el debate ideológico público, desarrollando una labor de promoción de las ideas favorables a una economía empresarial y haciendo claros los fundamentos económicos y éticos de este tipo de organización económica.

Así, a través de instituciones y asociaciones empresariales, y de distintos medios de comunicación masivos, Piazza continuó su prédica en favor de la empresa privada. Ésta llegó a tener una influencia tal que, en un foro universitario realizado en 1993, el ex presidente de Confiep Rafael Villegas Cerro afirmó que el pensamiento de Piazza constituía "algo así como la Biblia de los empresarios peruanos".

Asimismo, Piazza, junto con Félix Navarro Grau, respaldaron resueltamente la iniciativa de Felipe Ortiz de Zevallos M. —quien fuera copartícipe de sus empeños en el MEF— de fundar la organización Apoyo. El objeto social de esta empresa era, precisamente, difundir información verídica acerca de la marcha de la economía peruana, e inició sus actividades lanzando al mercado la revista Perú Económico. La Presentación de su primer número, fechado en enero de 1978, decía:

> "Perú Económico nace como resultado de la toma de conciencia de la magnitud del esfuerzo a realizar para superar los problemas coyunturales y estructurales que afronta nuestro país. Perú Económico, en forma sintética pero integral, pretende divulgar información, analizar problemas y

> proponer soluciones. A pesar de la gravedad del momento actual, no debemos olvidar que el Perú no es sólo un Problema, sino también —como dice Basadre— una Posibilidad"36.

Poco después, a esta misma tarea de difusión de información veraz y de análisis económico en favor de una economía libre se sumarían el Instituto Libertad y Democracia, dirigido por Hernando de Soto y el escritor Mario Vargas Llosa, a través de una prolífica actividad periodística. A ellos se les unieron, también, los viejos periodistas liberales que habían sido formados por Pedro Beltrán, en el diario La Prensa, así como también los periodistas del diario Expreso.

Sin embargo, a pesar de todo esto, el cambio de mentalidades no fue nada sencillo. Los prejuicios extendidos por la prédica colectivista y populista habían calado muy hondo. Las nuevas ideas económicas tardarían, así, mucho tiempo en arraigar en la opinión pública peruana. En realidad, sólo el trauma de la crisis económica y la hiperinflación —vividos, sobre todo, entre 1988 y 1990— haría posible que ésta se tornara receptiva, finalmente, a los postulados de un pensamiento económico racional.

También ayudaría a ello la conclusión de la Guerra Fría. A fines de 1989, en efecto, se vino abajo el Muro de Berlín y, dos años más tarde, se disolvió la Unión Soviética. Del mismo modo, resultó importante que fuera Alberto Fujimori —un hombre al margen de las tradiciones sociales y políticas en el país— quien terminara aplicando estas medidas —y consiguiendo que el país se levantara, y se echara a andar sobre sus pies.

En todo caso, el día más feliz en la historia de la nación peruana —el 12 de setiembre de 1992—, cuando fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, éste, enfrentado con su captor —el general de la Policía Nacional, Antonio Ketín Vidal Herrera—, se golpeó, con el dedo índice de la mano derecha, tres veces la cabeza y dijo: "Esto, lo que la gente tiene en la cabeza, es lo más importante. Las personas pueden pasar, pero las ideas son las que quedan".

Por una vez siquiera, el líder terrorista tuvo razón. Afortunadamente para el país, sin embargo, antes que Guzmán, otros peruanos —como el ingeniero Walter Piazza Tangüis— habían sembrado, en la cabeza de sus compatriotas, una mejor semilla que la

suya. Ayudada por circunstancias propicias, esta semilla buena no tardaría en dar frutos abundantes.

Lima, enero de 1995

Notas

1/ La bibliografía sobre el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas es sumamente extensa. Seguramente, se trata de uno de los experimentos políticos más estudiados en las ciencias sociales peruanas.

Para un testimonio de parte de algunos de los civiles que participaron en la Primera Fase, pueden verse los ensayos sobre las reformas estructurales del gobierno militar contenidos en: Ernest J. Kerbusch (Editor), Cambios estructurales en el Perú: 1968-1975. Lima, Fundación Friedrich Ebert/Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 1976.

Los adjetivos jacobina y termidoriana son de Enrique Chirinos Soto, en su Historia de la República, segunda edición. Lima, Editorial Minerva, 1982, pp.557-626.

2/ Ver IPAE (Editor), CADE '72: XII Conferencia anual de ejecutivos: La ocupación: factor prioritario para el desarrollo socioeconómico. Lima, IPAE, 1972, pp.183-200.

3/ Ver Idem., pp.79-108.

4/ Ver Desco (Editor), Perú 1977: cronología política. Lima, DESCO, 1978.

5/ Para una historia de Cosapi, ver Cosapi Organización Empresarial (Editor), Historia de un desarrollo: 1960-1990. Lima, COE, 1990.

6/ Ver IPAE (Editor), CADE '71: XI Conferencia anual de ejecutivos: Plan nacional de desarrollo para 1971-1975. Lima, IPAE, 1971, pp.209-234.

7/ Los discursos de Piazza y de Velasco están recogidos en IPAE (Editor), CADE '72: XI Conferencia anual de ejecutivos: La ocupación: factor prioritario para el desarrollo socioeconómico. Lima, IPAE, 1972. El segundo discurso de Piazza está también recogido en el libro La experiencia de construir futuro, Lima, Cosapi Organización Empresarial, 1991.

8/ Ver IPAE (Editor), CADE '72: XII Conferencia anual de ejecutivos: La ocupación: factor prioritario para el desarrollo socioeconómico. Lima, IPAE, 1972, pp.209-223.

9/ Ver IPAE (Editor), CADE '71: XI Conferencia anual de ejecutivos: Plan nacional de desarrollo para 1971-1975. Lima, IPAE, 1971.

10/ Ver cifras en Julio Velarde y Martha Rodríguez, Impacto macroeconómico: gastos militares en el Perú:1960-1987. Lima, CIUP, 1988.

11/ Ver Humberto Campodónico, La política petrolera: 1970-1985. Lima, Desco, 1986, pp. 165 y ss.

12/ Datos tomados del documento elaborado por la Unidad de Planeamiento y Sistemas del Area de Comercialización y Transporte de Petróleos del Perú, “Resultados de las Políticas de Precios de los Derivados del Petróleo: 1960-1990”. Lima, setiembre de 1991.

13/ Datos tomados del documento elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú, "Compendio estadístico (68-84)". Lima, 1985.

14/ Todos estos documentos, así como los apuntes de las entrevistas entre Piazza, Morales Bermúdez y Barúa, están recogidos en: Felipe Ortiz de Zevallos M. (Editor), Documentos MEF, tres tomos. Lima, 1977. Estos tres tomos son, en realidad, la base de esta investigación.

15/ Idem.

16/ Para un recuento periodístico bastante completo de la Primera Fase, ver las obras de Alfonso Baella Tuesta El poder invisible. Lima, Andina, 1976, y El miserable. Lima, Andina, 1978.

17/ Entre los militares golpistas de 1962, algunos estrenaron una cierta retórica radical, que anticipó en seis años a la de Velasco. El general Juan Bossio Collas, quien luego sería líder democristiano, por ejemplo, se hacía llamar "revolucionario". Para éstas y otras observaciones sabrosas, ver la obra de Enrique Soto León Velarde Mito y verdad de la "Revolución Peruana". Lima, Nueva Era, 1977.

18/ Para un compendio de documentos de la Primera Fase, que incluye el "Mensaje a la Nación" del presidente Juan Velasco Alvarado, del 28 de julio de 1970, donde desarrolla la tesis del modelo de desarrollo ni capitalista ni socialista, ver El proceso peruano: lecturas. Lima, Inide, 1974.

19/ Ocurrido el golpe de Estado, debe anotarse que hubo ciertamente algunos enfrentamientos, en calles y plazas, entre civiles y militares -especialmente, en Lima. Sin embargo, debe también precisar que ellos no se tradujeron ni en un solo muerto —como ocurrió en Chile en 1973, cuando el general Augusto Pinochet Ugarte derrocó al presidente Salvador Allende.

Por otro lado, no sólo el apoyo ciudadano respondió a dos razones distintas. La misma iniciativa militar parece haber tenido también intenciones mezcladas, tal como acredita María del Pilar Tello, en ¿Golpe o revolución? Hablan los militares del 68, dos tomos. Lima, Sagsa, 1983.

20/ Ver Octavio Paz, El ogro filantrópico. Barcelona, Seix Barral, 1979.

21/ En 1994, un cuarto de siglo más tarde, Fernando Henrique Cardoso sería el ministro de Economía del Brasil que, aplicando recetas económicas ortodoxas, detendría la hiperinflación. Gracias a ello, Cardoso terminaría luego siendo elegido Presidente de dicha nación.

22/ El discurso de Piazza, titulado "Exposición al país: Programa de Emergencia", apareció publicado en todos los diarios de Lima al día siguiente, 11 de junio de 1977. Está también recogido en el libro La experiencia de construir futuro. Lima, Cosapi Organización Empresarial, 1991, pp.45-61. Es de esta segunda fuente de donde se toman aquí todas las citas de esta sección.

23/ Idem.

24/ Idem.

25/ Ver Desco (Editor), Perú 1977: cronología política. Lima, DESCO, 1978, p.2,599.

26/ Ver "¡Otra vez!", en Caretas, Nº 520. Lima, 9 de junio de 1977, pp.18-19.

27/ Ver Desco (Editor), Perú 1977: cronología política. Lima, Desco, 1979, p.2,620.

28/ Para éstas y muchas otras informaciones y análisis importantes de esta etapa, ver Alfonso Baella Tuesta, ¿Qué pasa? Lima, Editorial Andina, 1977.

29/ Ver "El calvario de los precios", en Equis X. Lima, 28 de junio de 1977, pp.14-15.

30/ Este diálogo está recogido en: Felipe Ortiz de Zevallos M. (Editor), Documentos MEF. Lima, 1977, p.693.

31/ Para un recuento detallado de las exigencias del FMI, ver "La caída de Piazza", Equis X. Lima, 13 de julio de 1994.

32/ Idem.

33/ Idem.

34/ Para un recuento de la gestión Silva Ruete, ver la obra del mismo Javier Silva Ruete Yo asumí el activo y el pasivo de la Revolución. Lima, Centro de Documentación e Información Andina, 1981.

35/ El economista austriaco Joseph Schumpeter es quien primero formuló la idea de que la superioridad del mercado radica, sobre todo, en que facilita la actividad innovadora y la creatividad humana. Ver Christopher Clague, "The Journey to a Market Economy", en Christohper Clague y Gordon C. Rausser (Editores), The Emergence of Market Economies in Eastern Europe. Cambridge MA, Blackwell Publishers, 1992.

No es casualidad, por ello, que uno de los proyectos que emprendiera Walter Piazza Tangüis a principios de la década de los noventas fuera el Premio Nacional Cosapi a la Innovación. El mismo se otorga anualmente a peruanos —científicos, académicos, técnicos, etcétera— que han buscado y encontrado soluciones creativas para los problemas del país.

36/ Ver "Presentación", Perú Económico. Lima, enero de 1978.

Reconocimientos

Distintas instituciones y personas me han prestado colaboración y apoyo en la confección de este ensayo. Quiero agradecer, principalmente, a las siguientes:

- A Felipe Ortiz de Zevallos M. y al Instituto APOYO, por invitarme a escribir este trabajo y publicarlo de esta manera impecable. Además, Felipe leyó y releyó distintas versiones del texto, haciendo numerosas y valiosas observaciones sobre su fondo y forma.

- A Walter Piazza Tangüis y a Cosapi Organización Empresarial, por facilitarme materiales y documentos sobre el tema tratado. El ingeniero Piazza no sólo absolvió mis preguntas con toda amplitud y candor sino que me brindó su tiempo y apoyo con toda generosidad.

- A la Universidad del Pacífico, cuya Biblioteca fue mi principal fuente de material bibliográfico. Además, allí Felipe Portocarrero, profesor de Historia Económica del Perú, me hizo valiosas sugerencias sobre una versión previa, y Claudia Cerritelli, estudiante de Economía, me ayudó a recoger y verificar datos y cifras.

- A Luis Sardón Cánepa, mi padre, quien me prestó libros y revistas de la época, cuidadosamente atesorados, y con quien discutí extensamente el contenido de este texto.

- A Sandra, mi esposa, quien me alentó, a lo largo de estos meses de trabajo, de la manera en que sólo ella sabe y puede hacerlo.